

En efecto, uno de los elementos que distinguen a Argentina de otros países de la región es que el rechazo a la violencia política estatal devino parte del sentido común. Eso no significa que en estas décadas no haya habido represión e incluso muertos en protestas sociales, sino que el grado de esa represión y de la violencia política ha sido menor que en otros países, y que en varias ocasiones la muerte de protagonistas de protestas ha abierto crisis políticas e institucionales². Ese legado se tradujo en el emblemático Juicio a la Juntas (militares) en 1985, en la derogación y anulación de todas las leyes de impunidad aprobadas en los años 90 en 2003 y en el hecho de que en la actualidad haya más de 700 presos por crímenes de lesa humanidad. En junio de 2017, la Corte Suprema de Justicia aplicó el «2x1», que reducía el cómputo de la pena de un condenado por esos crímenes, y en una semana una multitud de argentinos salió a protestar a la calle³.

En 1989, el presidente Raúl Alfonsín adelantó las elecciones y su partido fue derrotado por el justicialista Carlos Menem. Los recurrentes problemas económicos se veían agravados por una inflación que en 1988 superó el 300%. Sin embargo, después de las elecciones se disparó un espiral hiperinflacionario que superó el 3.000% anual e ingresó en las antologías mundiales. En la ciudad de Rosario comenzó a haber reclamos de comida ante los supermercados, que terminaron en saqueos que se extendieron a Córdoba, Buenos Aires y otras ciudades. En contraste con las movilizaciones sindicales o políticas tan habituales en la historia argentina, los saqueos mostraron un fenómeno inédito en el que se combinaba el hambre con el debilitamiento de las organizaciones tradicionales. Los saqueos se repitieron como eventos en momentos de crisis aguda como 2001, o como «gran miedo» en diferentes meses de diciembre posteriores, en algunos años en que las tradicionales fiestas de fin de año se combinaron con una situación social complicada y con cierta debilidad política del gobierno.

Pero además de indicar el ingreso de otro actor u otra faceta popular, la combinación de la crisis de la hiperinflación de 1989, que tuvo nuevos brotes al año siguiente, y del potencial «caos social» legó en la cultura política argentina un miedo muy distinto al de la violencia política: el miedo a la inflación. La hiperinflación es un fenómeno de disgregación social. Justamente Carlos Menem impuso su hegemonía sobre la base de la estabilidad monetaria, al fijar por ley que cada peso era convertible en un dólar (por la que se conoció como Ley de Convertibilidad). Entre 1991 y 2001 los argentinos soportaron no solo un neoliberalismo extremo, sino el aumento del desempleo, que pasó de 6% en 1989 a 22% en 2002⁴. Esa sociedad con «estabilidad» que excluía a millones de argentinos vio agravada su situación con el inicio de la recesión en 1998. Mientras crecían lentamente las protestas de los desocupados y de un sector del